

oportunista o asesino antes que como un estadista o caudillo. En ese sentido, el parricidio cometido por la derecha chilena constituye una hipócrita “fuga hacia delante”, cuyo objetivo es salvar responsabilidades y

limpiar sus cuestionadas vidas con base a un chivo expiatorio de turno: total... hijos de la traición son.



## BIBLIOGRAFÍA REFERIDA

- MANNS, Patricio, *Chile una dictadura militar permanente 1811-1994*, Sudamericana, Chile, 1999.
- MOULIAN, Tomás, *Chile Actual. Anatomía de un mito*, Lom, Chile, 1997.
- PINOCHET, Augusto, *Pinochet: patria y democracia*, Andrés Bello, Chile, 1985.
- SALAZAR, Gabriel, *Historia contemporánea de Chile*, t. I, Lom, Chile, 1999.
- SIBAJA, Marco, *La Nación Digital*, 11 de septiembre de 1998. Consultado el 15 de enero de 2007 en [http://www.nacion.com/ln\\_ce/golpechile/distante.html](http://www.nacion.com/ln_ce/golpechile/distante.html)

# PRAGMATISMO POLÍTICO Y EXPECTATIVAS SOCIALES: LAS DOS CARAS DEL SANDINISMO

—■■■■—  
*Kristina Pirker*

No cabe duda que la victoria de Daniel Ortega en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre de 2006 convirtió a Nicaragua en un caso único en América Latina. Por primera vez (si exceptuamos las elecciones de 1985 en las cuales el FSLN obtuvo la mayoría absoluta y Daniel Ortega fue elegido presidente), un partido exguerrillero, que tomó el poder político por la vía de las armas y lo entregó después de perder en las urnas, vuelve al gobierno por la vía electoral. Pese a la campaña de miedo de los otros partidos -los cuales buscaron reducir la intención de voto a favor del FSLN reviviendo los fantasmas de los años ochenta, como la guerra y el bloqueo económico del gobierno estadounidense-, Ortega obtuvo un 38.07 por ciento de los votos, porcentaje suficiente para ganar en la primera vuelta. Pese a las advertencias realizadas, hubo una diferencia de 9 por ciento de votos entre el postulante sandinista y Eduardo Montealegre (candidato ligado al entonces presidente Enrique Bolaños y que quedó en segundo lugar con 29 por ciento de los votos). Con base en los resultados electorales, los críticos

del sandinismo que quieren mostrar el bajo nivel de aceptación de Ortega en la sociedad nicaragüense destacan que un 62 por ciento de la población votó en contra de Ortega. Pero bajo el mismo criterio habría que señalar también que un 71 por ciento de los votantes votó en contra de la continuidad de las políticas económicas basadas en el Consenso de Washington y representadas por la candidatura de Montealegre. Del mismo modo, el Movimiento de Renovación Sandinista -que se presentaba como una izquierda con una propuesta ética, prometiendo una profunda reforma institucional para acabar con la corrupción- quedó en el cuarto lugar con sólo 6.44 por ciento de los votos.

Varios factores explican la victoria sandinista. El retorno de Daniel Ortega fue posible gracias a la división del voto antisandinista, repartido entre PLC (Partido Liberal Constitucional) y ALN-PC (Alianza Liberal Nicaragüense-Partido Conservador); pero también por una reforma constitucional que permite evitar una segunda vuelta, si uno de los candidatos alcanza más del 35 por ciento de los votos y

una diferencia de 5 por ciento respecto al candidato que quede en segundo lugar. Al mismo tiempo, la inserción en puestos estratégicos dentro el Poder Electoral por colaboradores cercanos de Ortega, permitió que el líder del FSLN controlara el proceso electoral. Sin embargo, el PLC y la ALN-PC tienen la mayoría en la Asamblea Legislativa, lo cual significa que Ortega, para impulsar su agenda política, tendrá que negociar con al menos una de las dos fuerzas de derecha. Pero no sólo estos resultados electorales condicionarán la libertad de acción del nuevo presidente, sino también los pactos que negoció Ortega con distintos actores políticos para poder ocupar la presidencia, entre ellos empresarios, ex dirigentes políticos de la llamada Contra (la fuerza militar financiada por el gobierno estadounidense, y que en los años ochenta se enfrentó al gobierno sandinista) e, incluso, representantes de la alta jerarquía de la Iglesia Católica. El pragmatismo político de Ortega y del FSLN se mostró de manera dramática en el apoyo que Rosario Murillo (esposa y jefa de campaña de Ortega) y la bancada sandinista en la Asamblea Legislativa brindaron a la campaña realizada por organizaciones de derecha como Pro-Vida —en las semanas previas a la jornada electoral— para penalizar el aborto terapéutico. Así, el 26 de octubre de 2006, pese a las críticas de organizaciones de mujeres y asociaciones de médicos, la Asamblea Legislativa aprobó con mayoría una modificación del Código Penal que imponía un castigo de hasta 8 años de cárcel a mujeres y médicos que aplicaran un aborto por razones de salud o violación. Pese a los cuestionamientos al interior de la organización, la bancada sandinista apoyó esta iniciativa conservadora, con base en un pragmático cálculo electoral para consolidar el vínculo con nuevos aliados como la Iglesia Católica y atraer el voto de sectores tradicionalmente antisandinistas.

Por otra parte, grupos de la derecha que habían sido marginados del poder político durante la presidencia de Enrique Bolaños (2001-2006) se sumaron implícita o explícitamente a la campaña de Ortega. Ejemplo de lo anterior es el nuevo vice-presidente de Nicaragua: Jaime Morales Carazo, un empresario liberal que hace dos décadas formó parte de la dirección política de la denominada Contrarrevolu-

ción. Esta situación refleja el grado de adaptación del FSLN al sistema político posrevolucionario, pero no sólo esto: también da cuenta de que la carencia de ideologías, entendidas como marcos cognitivos para orientar la acción y principios de diferenciación entre sujetos políticos, es un rasgo importante de la cultura política nicaragüense. La falta de principios quedó manifestada en los acuerdos que Daniel Ortega y Arnoldo Alemán (expresidente liberal de 1996 a 2000, ahora preso por corrupción) han negociado desde 1998 —conocidos popularmente como “el pacto”— para reformar la Constitución y controlar el Poder Electoral y Judicial, distribuyendo los cargos entre sandinistas “danielistas” y liberales “alemanistas”. Este control ha aumentado el poder de los dos caudillos al margen de las instituciones representativas, de las instancias de sus propios partidos y de la población en general.

No obstante todos los arreglos personales y otras maniobras para atraer el voto de otros sectores, el FSLN no incrementó su número de votos. Pese a la ampliación del padrón electoral Daniel Ortega sólo obtuvo 854,316 votos, que son 68,120 menos que en las elecciones presidenciales de 2001. Si no decreció más fue por el apoyo de los jóvenes: más de la mitad de los que votaron por el FSLN son jóvenes que no conocieron el gobierno sandinista de los años ochenta. Daniel Ortega buscó atraer a este segmento con la promesa de poner en el centro de su agenda política el combate a la pobreza y la creación de empleos.<sup>1</sup>

La victoria electoral sandinista ha despertado, entonces, una serie de expectativas sociales, imposibles de reconciliar porque su cumplimiento implicaría atacar intereses de la jerarquía ultraconservadora de la Iglesia Católica, así como de los sectores empresariales nacionales que buscan mantener sus tasas de ganancias. Demandas que por su orientación tienen por objetivo mayor justicia social y una mejor distribución de la riqueza. Para entender cómo Ortega enfrentará estos intereses encontrados hay que tomar en cuenta que el FSLN, al mismo tiempo que se adaptó al sistema político posrevolucionario, ha tenido la capacidad de moldear este sistema gracias a las relaciones del partido con el aparato estatal, las fuerzas armadas y las organizaciones de masas,

<sup>1</sup> ROCHA, “Caracterización”, 2006.

constituidas a partir de la toma del poder estatal a raíz de la revolución sandinista. Aproximarse al segundo gobierno de Ortega desde este trasfondo histórico es el objetivo principal de las siguientes páginas.

## PAZ Y NEOLIBERALISMO EN NICARAGUA

Ortega puso en el centro de su campaña electoral la promesa de instrumentar políticas para crear empleos y asegurar el acceso gratuito a la salud y educación porque la pobreza es el problema político y social más agudo del país: De una población de aproximadamente 5,4 millones, un 69.3 por ciento vive en condiciones de pobreza y un 42 por ciento en condiciones de indigencia. Un 27 por ciento de la población se encuentra en un estado de desnutrición crónica porque no puede cubrir el mínimo del consumo de energía alimentaria. Por otra parte, la distribución de los ingresos es altamente desigual: mientras el 20 por ciento más rico de los hogares nicaragüenses dispone del 61 por ciento de los ingresos, el 20 por ciento más pobre sólo dispone del 2,5 por ciento.<sup>2</sup> Debido a la crisis agraria y la ausencia de una política de empleos en los últimos gobiernos, el crecimiento económico de los últimos años no ha incidido positivamente en las condiciones de vida de la población. La caída de los precios internacionales de productos agropecuarios tradicionales de Nicaragua, como el café y el algodón, profundizó la crisis del agro nicaragüense —que según analistas sufre un rezago estructural de unos 50 años—, la dependencia alimenticia del país y la progresiva pauperización de los campesinos obligados a abandonar las actividades agrícolas. Actualmente, el nivel de vida de la mayor parte de la población está por debajo del nivel alcanzado en los años setenta y es más bajo que en los países vecinos. La drástica reducción del empleo por los recortes de plazas en el sector público, el cierre de empresas manufactureras y la crisis del agro hizo que la población buscara nuevas opciones, como el sector informal urbano o la migración: A fines de los años noventa, un 52 por ciento de la PEA urbana estaba ocupada en el sector

informal, y aproximadamente un diez por ciento de la población vivía en el extranjero, principalmente en Costa Rica y Estados Unidos. En el 2000 fueron registrados 532 mil nicaragüenses viviendo en otros países de América, de los cuales el 42,5 por ciento se encontraba en Costa Rica y el 46 por ciento en Estados Unidos. Un diez por ciento de la población que vive en el extranjero es una proporción relativamente elevada para un país latinoamericano. Sólo países como El Salvador o México tienen proporciones similares, mientras países de una larga tradición migratoria como Bolivia o Colombia tienen porcentajes inferiores. Además, en Nicaragua, el incremento de la migración es un fenómeno reciente: en los años setenta sólo un dos por ciento de la población vivía en el extranjero.<sup>3</sup>

En este contexto —donde la imposición de techos presupuestales por el FMI estrecha aún más los márgenes de maniobra del gobierno— se desarrollaron una serie de conflictos sociales: al desaparecer los tres bancos estatales y quebrar varios bancos privados entre 2001 y 2002, cuya deuda asumió el Estado, los pequeños productores perdieron acceso a créditos, agravándose de esta manera la crisis agraria. Esta situación produjo la migración individual campesina pero también una nueva forma de protesta social, las “marchas del hambre”: familias campesinas que “bajaban” de los pueblos a los centros departamentales y a la capital para exigir comida y una solución a la falta de medios de subsistencia en el campo. En el 2003, el anuncio de la privatización de los servicios del agua y alcantarillado generó un amplio movimiento social de protesta, sobre todo en la región del Pacífico, que logró —al menos por un tiempo— frenar la estrategia de privatización. Y cada año, durante la negociación del presupuesto, diversos sectores sociales han salido a la calle: los médicos y trabajadores de la salud, que exigen incrementos al presupuesto social, y los estudiantes universitarios, que luchan para que se asigne el seis por ciento del presupuesto a la educación superior pública. En estos conflictos se perfilaron dos Nicaraguas: una habitada por gobernantes con poco margen de maniobra y preocupados por mantener una relación estable con los inversionistas extran-

<sup>2</sup> CEPAL, *Anuario*, 2005.

<sup>3</sup> BAUMEISTER, *Migración*, 2006, p. 16; PNUD, *Segundo*, 2003, p. 125.

jeros y los organismos financieros; la otra habitada por una población que se siente despojada y excluida de los beneficios del crecimiento económico.

Al prometer créditos productivos, empleo, salud y la baja de los costos de vida —por medio del petróleo subvencionado de Venezuela y de la asistencia médica de Cuba— Daniel Ortega logró en la campaña electoral interpelar a esta segunda Nicaragua. Además, los militantes del FSLN —especialmente de las organizaciones sectoriales—, han participado activamente en las diversas protestas sociales, como las movilizaciones en contra de la privatización del agua o las movilizaciones estudiantiles. Esto ha servido al partido para mostrar fuerza y presencia política ante los demás actores políticos, dando cuenta también de las redes sociales que vinculan militancia sandinista y activismo social y expresan simpatías e identidades políticas compartidas.

## GOBERNAR DESDE ABAJO: LA INCORPORACIÓN SANDINISTA AL SISTEMA POLÍTICO POSREVOLUCIONARIO

Negociar acuerdos políticos y movilizar a los sectores populares han sido dos estrategias centrales del FSLN, incluso desde antes de la toma de poder en 1979. Previamente a la caída del dictador Anastasio Somoza, el sandinismo se había puesto al frente del movimiento de oposición gracias al extraordinario pragmatismo ideológico de sus líderes, el cual les permitió participar desde una posición estratégica, que iba más allá del control de las armas, incluyendo el apoyo de gobiernos latinoamericanos como Venezuela, Cuba y Panamá, en una amplia y heterogénea alianza política. Aprovechando la simpatía y la movilización popular, el FSLN se convirtió, primero, en organización dirigente de la insurrección y, después, en partido de Estado que marginaba del ejercicio del poder a otras fuerzas políticas, como la burguesía conservadora y la izquierda no sandinista. Durante los años ochenta, las organizaciones de masas, como la Central Sandinista de Trabajadores (CST) o la Asociación de Trabajadores del Campo (ATC), se convirtieron (junto con el ejército y el par-

tido) en los pilares del Estado revolucionario al canalizar la participación social y controlar el creciente descontento popular conforme la guerra y el estancamiento económico deterioraban las condiciones de vida de la mayor parte de la sociedad.

En febrero de 1990, cuando Daniel Ortega tuvo que reconocer la derrota electoral, prometió a sus seguidores que en adelante el Frente iba a “gobernar desde abajo”. Con esto parecía anunciar que el partido se movilizaría, junto con las organizaciones de masas, para impedir el desmantelamiento de las conquistas de la revolución, como la Reforma Agraria y el acceso gratuito a la salud o la educación. En estas grandes movilizaciones sociales de 1990 y 1991 se mostró la capacidad del sandinismo de parar todo el país, incluyendo el aeropuerto, las telecomunicaciones y los ministerios, lo cual obligó al gobierno de Violeta Barrios de Chamorro (1990-1996) a reconocer la posición del FSLN como interlocutor estratégico para asegurar la gobernabilidad del país. Chamorro se vio obligada a establecer una “mesa de concertación” con sindicatos y organizaciones campesinas, pero fue el FSLN —y especialmente su secretario general Daniel Ortega— quien se apropió del capital político, al participar en las mesas y fungir como vocero de la movilización popular.

En las rondas de negociaciones entre gobierno y FSLN que se dieron a partir de 1991, se fijaron las nuevas reglas del juego político al cual adhirieron todos los actores: por una parte, el gobierno de Chamorro tuvo que aceptar la presencia del FSLN como interlocutor político y, por otra parte, el FSLN y sus grandes organizaciones de masas reconocieron implícitamente el nuevo orden económico y la reforma liberal del Estado. Así, CST y ATC abandonaron en 1992 su resistencia a las privatizaciones de las empresas públicas (Área Propiedad del Pueblo o APP), a cambio del compromiso gubernamental de entregar un 25 por ciento de las acciones de las empresas privatizadas a los trabajadores que allí laboraban.<sup>4</sup>

De esta manera, el FSLN pudo mantener importantes “enclaves” de control en el ejército, la policía y los municipios. Aprovechando la debilidad de los gobiernos para implementar los programas de ajuste económico y las reformas políticas, acordadas

<sup>4</sup> BANS, “Ajuste”, 1995, p. 227; FNT, *Sindicalismo*, 2000, p. 21.

con las organizaciones financieras internacionales, el FSLN desarrolló una habilidad extraordinaria para hacer y deshacer acuerdos políticos. Parcialmente explicable por el pragmatismo ideológico, su posición como interlocutor central ante los gobiernos se facilitó, entre otras cosas, por los lazos sociales y familiares que existen entre el sandinismo y la influyente burguesía conservadora, como las familias Chamorro o Jarquín, vínculo que siempre le permitió al frente mantener canales informales de comunicación, incluso en los momentos más confrontativos de los años ochenta y principios de los noventa.<sup>5</sup>

El ascenso al gobierno del empresario y exalcalde de Managua Arnoldo Alemán en 1996 parecía anunciar una agudización de los conflictos entre las dos fuerzas antagónicas. El recién electo gobierno intentó debilitar las estructuras organizativas sandinistas creando organizaciones paralelas “apolíticas” para canalizar el gasto social y los recursos de la cooperación externa. Pero al mismo tiempo iniciaron las negociaciones internas entre Alemán y Ortega que llevaron a las modificaciones constitucionales de principios de 2000, orientadas a reforzar la presencia del PLC y del FSLN en instancias clave para controlar el proceso electoral (Consejo Supremo Electoral) y el Poder Judicial. La reforma electoral asegura a todos los expresidentes una diputación, por derecho de expresidente, en la Asamblea Nacional o en el Parlamento Centroamericano. Este arreglo iba a beneficiar tanto a Alemán, quien buscaba evitar un posible enjuiciamiento por corrupción después de su mandato, como a Daniel Ortega acusado, por su hijastra Zoilamérica de haber abusado de ella cuando era menor de edad.

También el gobierno de Enrique Bolaños (2001 a 2006) dependió del apoyo sandinista: En el 2002, a raíz de las presiones internacionales y especialmente del gobierno estadounidense, el presidente se desligó públicamente de su antecesor Alemán al iniciar las negociaciones políticas para revocar su inmunidad parlamentaria e iniciar el proceso de enjuiciamiento por corrupción. Al encontrarse con la resistencia del partido PLC —mayoritariamente alemanista— Bolaños tuvo que buscar como aliado al FSLN como partido de oposición más fuerte. En consecuencia el Libe-

ralismo se dividió: mientras el aparato partidista y la mayoría de la bancada legislativa se mantuvieron fieles a Alemán, algunos pocos parlamentarios y el gabinete de Bolaños formaron la ALN como una opción liberal “no-alemanista”. Sin mayoría en la Asamblea Nacional e incapaz de consolidar consensos políticos internos, Bolaños tuvo que buscar otros apoyos para estabilizar su gobierno, especialmente el proveniente de los organismos financieros internacionales, que condicionaban el desembolso de recursos al cumplimiento de los programas de ajuste estructural. Pero para aprobar las medidas legislativas necesarias —como la ratificación del ingreso de Nicaragua al Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA)— el gobierno necesitó varias veces del apoyo de la oposición sandinista.

Como se puede observar, el argumento de analistas (de izquierda) que explican la división del voto antisandinista exclusivamente como resultado de las habilidades maquiavélicas de Ortega y su pacto con el Alemán, tienden a omitir estos conflictos internos del liberalismo, que el líder sandinista supo hábilmente aprovechar para consolidar su posición de fuerza en el sistema político nicaragüense y “gobernar desde abajo”. Siempre manteniendo su discurso antisandinista, cada uno de los tres gobiernos de derecha en algún momento tuvo que buscar el apoyo del FSLN para sostenerse y mantener la gobernabilidad. Aprovechando esta debilidad, el sandinismo contribuyó a la estabilidad política del país a cambio de ampliar crecientemente su influencia en las instituciones estatales. Mientras que con Chamorro el FSLN negoció el control sobre el ejército y la policía, con Alemán obtuvo posiciones estratégicas en el Poder Judicial y Electoral. Si sumamos a esto que los municipios más importantes, entre ellos Managua, son gobernados por el FSLN, se evidencia el importante grado de control que tendrá el gobierno de Daniel Ortega de cara a los próximos años.

Que la “búsqueda” de apoyo no se haya expresado en acuerdos partidistas formales sino en arreglos personales y clientelares entre Alemán y Ortega, da cuenta —más allá de los intereses personales de los dos caudillos políticos— de la precariedad de las instituciones representativas en Nicaragua orientadas a

<sup>5</sup> VLAS, “Clase”, 1993.

construir los consensos necesarios para gobernar. Esto responde a la presencia de tradiciones caudillistas, pero también de fuerzas centrífugas internas generadas por la pobreza y las contradicciones sociales, y de la debilidad de una clase dominante incapaz de mantener una mínima hegemonía política. De estas contradicciones surgió la necesidad, desde el punto de vista de los grupos dominantes, de negociar con el FSLN por ser éste una fuerza capaz de lograr cierta cohesión social y, por tanto, gobernabilidad.

## ¿UN GOBIERNO DE IZQUIERDA?

Las estrategias que prometió Ortega para enfrentar estos problemas parten de una revalorización del papel del Estado como mecanismo redistributivo y de desarrollo, sin cuestionar la centralidad del mercado. Prometió una participación más activa del Estado en los servicios públicos clave y en la economía, por medio de una política de creación de bancos —un Banco Comunitario para atender las necesidades de los pequeños y medianos productores agrícolas y un Banco Municipal— y de impulsar créditos productivos. Para avanzar hacia una reorientación productiva de la economía, Ortega prometió convocar a los actores económicos y sectoriales para elaborar una Estrategia Nacional de Desarrollo que trascendiera el periodo de su gobierno. La carta fuerte de Ortega en la propuesta económica fue la promesa de adquirir petróleo venezolano a precios solidarios para amortiguar la crisis energética en el país. Para diversificar las relaciones comerciales Ortega anunció no sólo renegociar los programas de ajuste estructural y el CAFTA, sino también preparar la integración de Nicaragua al bloque económico bolivariano, el ALBA. Como una afirmación, al menos discursiva, de la soberanía nacional hay que entender también el compromiso de no permitir que el Ejército Nacional opere como una fuerza de ocupación al servicio de potencias extranjeras, una clara alusión a la participación de las fuerzas armadas nicaragüense en las tropas multinacionales estacionadas en Irak. En la agenda social, el programa electoral evocó las experiencias más gratas de la revolución sandinista =alfabetización y salud— al prometer el acceso gratuito a la educación primaria y secundaria, el respeto a la asignación del 6 por ciento del presupuesto para la Universidad, la ampliación del sistema de salud y el mejoramiento de la atención con la llegada de médicos cubanos.

Si bien Daniel Ortega propone un papel activo del Estado en la economía que va más allá de la regulación y supervisión de las transacciones entre privados, dejó claro que no se intervendría en las relaciones de propiedad ni se repetirían las expropiaciones o tomas de tierras de los años ochenta. Este pragmatismo se confirmó con los primeros comentarios de los dirigentes sandinistas, después de la victoria electoral del año pasado. Por ejemplo, Bayardo Arce —que en el gabinete de Ortega ocupa una cartera de asesor de la Presidencia— señaló que el nuevo gobierno nicaragüense aceptaría las condiciones “razonables” del FMI para mantener los programas financieros y asegurar los desembolsos de recursos, prometidos por el organismo financiero, en tanto el propio Ortega, en las primeras reuniones con representantes sindicales y campesinos llamó, ante los reclamos sectoriales, a la paciencia, advirtiendo que su gobierno no aceptaría tomas de tierra u otras violaciones a la propiedad privada.

Sin embargo, dentro de este pragmatismo político, también ha habido anuncios que indican la modificación de las prioridades del gasto público. Así, el Poder Ejecutivo promulgó, pocos días después de tomar posesión, un decreto para garantizar el acceso gratuito a la salud y la educación, a través de la abolición del cobro de las cuotas introducidas por las administraciones anteriores, y otro decreto que bajaba los salarios de los altos funcionarios, empezando por el presidente que ganará 3,200 dólares mensuales en vez de los 10,000 de su antecesor. ¿Se trata de actos aislados para obtener una mayor legitimidad o de una estrategia gubernamental encaminada a la necesaria reconstrucción del tejido social nicaragüense, destruido en 30 años de guerras y deterioro económico? Esto lo demostrarán los próximos años. Pero vale la pena señalar que la victoria electoral del FSLN fue posible porque, a diferencia de las organizaciones político-militares en El Salvador y Guatemala, el sandinismo pudo participar de manera decisiva en la reorganización del sistema político posrevolucionario, conservando e incluso recuperando importantes “enclaves” en las instituciones estatales, como en el Poder Electoral y Judicial. Varios factores contribuyeron a esto: entre ellos, haber ocupado el aparato estatal durante los diez años de la revolución, la capacidad de seguir movilizándolo a sus bases en el período posterior y, también, la debilidad organizativa de los partidos de derecha, y la habilidad del FSLN

de hacer y deshacer acuerdos políticos en función de fines políticos acotados y sin tomar en cuenta principios ideológicos.

El control sobre instituciones estatales clave, más los vínculos con las organizaciones sociales más grandes del país y las alcaldías sandinistas, son recursos que pueden abrir al gobierno de Daniel Ortega un considerable margen de maniobra para enfrentar a los partidos de derecha en la Asamblea Legislativa e implementar una agenda política alternativa. En cambio, los pactos personales, el pragmatismo político de Ortega y del FSLN, pero sobre todo la vulnerabilidad externa y la dependencia financiera de Nicaragua, son factores que llevarán al nuevo gobierno a instrumentar políticas moderadas en vez de buscar cambios radicales. Pero no se debe olvidar que Ortega ganó las elecciones gracias al desencan-

to de un segmento importante de la población con las políticas neoliberales, por lo cual la estrategia sandinista de destacar las acciones más reconocidas de la revolución sandinista, como el acceso universal a la educación o la salud, fue exitosa. Recurrir a los recuerdos más gratos de la revolución sandinista —cristalizados en la promesa de la justicia social— puede ser uno de los recursos simbólicos más importantes de Ortega para mantener el apoyo de los sectores populares;<sup>6</sup> sin embargo, no basta para silenciar los reclamos por salud, educación o vivienda. Atrapado entre expectativas e intereses sociales contradictorios, la consolidación de los viejos pactos es sólo una vía para mantener la gobernabilidad, pero el desgaste político del gobierno de Ortega parece inevitable si no instrumenta medidas encaminadas a resolver el problema de la desigualdad social.



## BIBLIOGRAFÍA REFERIDA

- BAUMEISTER, Eduardo, *Migración internacional y desarrollo en Nicaragua*, Serie Población y Desarrollo, núm. 67, Santiago de Chile, CEPAL / CELADE, enero de 2006, versión electrónica [www.eclac.cl](http://www.eclac.cl) (consultado en noviembre 2006).
- CEPAL, *Anuario estadístico de América Latina y Caribe 2005*, Santiago de Chile, disponible en línea, [www.eclac.org/cgibin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/0/26530/P26530.xml&xsl=/deype/tpl/p9f.xsl&base=/tpl/top-bottom.xslt](http://www.eclac.org/cgibin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/0/26530/P26530.xml&xsl=/deype/tpl/p9f.xsl&base=/tpl/top-bottom.xslt) (consultado en octubre 2006).
- EVANS, Trevor, “Ajuste estructural y sector público en Nicaragua”, en Trevor EVANS (coord.), *La transformación neoliberal del sector público. Ajuste estructural y sector público en Centroamérica y el Caribe*, Latino Editores / CRIES, Managua, 1995.
- FNT, *Sindicalismo, Proyecto de Capacitación Sindical*, Managua, 2000.
- PNUD, *Segundo Informe sobre desarrollo humano en Centroamérica y Panamá 2003*, San José de Costa Rica, 2003.
- ROCHA, José Luis, “Sala de urgencias: el agro a cuidados intensivos”, en *Envío*, núm. 226, Managua, enero-febrero, 2001, versión electrónica: <http://www.envio.org.ni/articulo/1055>, (consultado en diciembre 2002).
- ROCHA, José Luis, “Una caracterización de los votantes sandinistas del 5-N”, en *Envío*, No. 296, noviembre de 2006, <http://www.envio.org.ni/articulo/3422>, (consultado en enero de 2007).
- VILAS, Carlos M., “Clase, linaje y política. Notas sobre la burguesía nicaragüense”, en *Panoramas de nuestra América. Burguesías en América Latina*, núm. 10, México: CCYDEL / UNAM, 1993.

<sup>6</sup> Como ejemplo de los simbolismos vale la pena citar a Rosario Murillo quien el 3 de enero de 2007 anunció que el Centro de Convenciones Olof Palme, construido por el gobierno sandinista, será la nueva Casa de Gobierno. Ha señalado Murillo: “...este es un sitio de mucha historia, de mucho simbolismo; en segundo lugar, es un espacio moderno, sencillo, que se presta para muchas actividades y, consideramos que debe ser restaurado a su dignidad original, porque lleva el nombre de un gran Presidente, Olof Palme. Queremos conservar ese nombre... se va a llamar, Casa de Gobierno Olof Palme. Queremos sobre todo, te decía, restaurar el espacio a su dignidad original, que quiere decir, que estas instalaciones sean utilizadas para que funcione aquí un Gobierno que represente los intereses de tod@s l@s nicaragüenses y, que represente las posibilidades de mejoría, también, en la vida de tod@s l@s nicaragüenses”. Véase “Entrevista con Rosario en el recorrido por el Centro de Convenciones Olof Palme”, 3 de enero de 2007, disponible en línea [www.fsln-nicaragua.com](http://www.fsln-nicaragua.com) (consultado en enero 2007).